



DEMOCRATIZACIÓN Y TRANSICIÓN EN CHILE

Ricardo Yoceluzky¹

Se presenta aquí un examen de la situación política chilena actual, que busca hacer visible las características más profundas y determinantes de la estructura democrática que reemplazó a la dictadura a partir de 1990. Específicamente, se vinculan las acciones y posiciones asumidas por la élite política partidista en el proceso de transición, con algunos problemas y limitaciones del proceso democratizador, que algunos actores políticos en el gobierno comienzan a notar. Se destaca la limitación que representa para el examen de estos problemas la evolución ideológica de esos actores en el proceso.

This examination of the current political situation in Chile seeks to bring to light the deepest and most decisive characteristics of the democratic structure that replaced the dictatorship as of 1990. Specifically it links the actions and positions of the political party elite in the transition process with some of the problems and limitations in the democratizing process, which some political actors in the government are starting to take note of. The author underlines the limitations that the ideological evolution of these actors in the process place on the examination of these problems.

*Para Galo Gómez Ogalde
in memoriam*

*A esta izquierda se le suben las derrotas a la cabeza.
Enzo, el Flaco*

Introducción

Una crítica recurrente a los procesos de democratización en curso en América Latina hoy, se refiere a la disociación entre la vigencia de mecanismos de elección para generar las autoridades y el personal que ocupa los puestos de gobierno, y la creciente exclusión social y económica que se observa a través de múltiples estudios y de movimientos sociales que no encuentran expresión en la estructura de representación política asociada con las instituciones democráticas, en particular, a través de los partidos políticos.

¹ Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.

En el caso de Chile esta preocupación es explícita entre los actores políticos, a partir de la abstención electoral observada en los últimos procesos de este tipo y en la perspectiva de las contiendas que se aproximan. Sin embargo, los términos en que se da la discusión entre los actores políticos presuntamente afectados, resulta limitada en los factores considerados, como expresión de limitaciones en el pensamiento (¿conciencia?) posible acerca de los procesos de los que han sido actores en el pasado. La misma extensión y definición de ese pasado a considerar es objeto de intensa disputa ideológica en los medios intelectuales de Chile hoy.

En este artículo se busca mostrar la relación entre las disputas actuales, la forma de expresarlas por los actores mismos, y la génesis de la situación en la que tienen lugar. Partiendo de las discusiones que caracterizan la coyuntura actual, se examinan luego las limitaciones institucionales que caracterizan al proceso chileno, buscando en el origen de esta estructura, y en el proceso de incorporación a ella, y de adopción de ella como propia por los elementos de la oposición a la dictadura que precedió al actual tipo de gobierno, las determinantes estructurales de los fenómenos observados y discutidos. En particular, la hipótesis es que la exclusión de las expresiones de demandas sociales no es un accidente, sino una condición de la existencia del actual sistema político, caracterizado por un sistema de partidos reconstruido con cambios fundamentales en el espectro ideológico que cubre, siendo esto una expresión del cambio en su relación con las fuerzas que surgen y se mueven en la sociedad.

La percepción coyuntural

La coyuntura chilena actual está definida, en lo fundamental, por tres discusiones. Las tres resultan contenciosas para la coalición de partidos en el gobierno porque conducen al examen de elementos en su propia constitución, respecto de los cuales no hay consenso entre sus componentes, y menos aún entre los electores que los apoyan.

El problema que acapara el primer plano es el de la designación de los candidatos presidenciales para las elecciones de diciembre de este año. Éste es el eje de la vida política de este periodo, tanto para las fuerzas del gobierno como para las de la oposición. Sin embargo, la perspectiva de un nuevo periodo de gobierno de la misma alianza de partidos hoy en el poder, y los resultados de la elección parlamentaria de diciembre de 1997, desataron en el seno de ésta un debate, que generó una segunda discusión, de menor difusión, pero mayor profundidad a mediados de 1998, en la cual se cuestionaron algunas bases de las propuestas y la acción de la concertación como

fuerza política en el gobierno. Esto se vio complicado por la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, la posición asumida por el gobierno chileno y las reacciones de los partidos que forman parte de él, que no fueron unánimes pero que tampoco asumieron con claridad las diferencias.

Una evaluación de la extensión y profundidad del proceso de democratización que ha tenido lugar en Chile a partir del final de la dictadura militar, en 1990, necesariamente tiene que ir más atrás de estas discusiones coyunturales, pero como los argumentos en estas confrontaciones aluden frecuentemente a las características y límites de este proceso como el marco que delimita no sólo las posibilidades de acción sino incluso las de pensamiento, el examen de esos argumentos y su asociación con la posición de quienes los esgrimen parece ser el camino necesario para llegar a las características que definen el proceso estructuralmente, esto es, más allá de las opiniones de los actores mismos.

Una cuestión de suma importancia desde el punto de vista teórico es que no hay consenso en la definición del proceso chileno. Por una parte, considerado como integrante de la "ola" democratizadora, sus características se definen por semejanza o diferencia con otros casos de transición, con lo cual la caracterización queda subordinada a la definición de las dimensiones de comparación (por ejemplo, la transición chilena pertenece al tipo de las "pactadas"). Por el contrario, una definición del proceso chileno como "redemocratización"¹ coloca el marco histórico en el sentido de una comparación en el tiempo y no en el de una comparación con otros casos contemporáneos.

De hecho, ambas perspectivas no son necesariamente incompatibles en el terreno teórico, y hasta se podría afirmar su eventual complementariedad. El problema surge porque los hechos que se seleccionan como datos para el análisis cambian de sentido en el paso de una perspectiva a otra. En segundo lugar, son hechos que forman parte de la discusión política contingente y, por lo tanto, los actores mismos definen estos hechos en una perspectiva u otra como parte de su argumentación. Por lo tanto las cuestiones de periodización son parte de la confrontación ideológica.

Si se observa a los actores de estos procesos democratizadores se encuentra que las orientaciones y justificaciones de su acción están definidas por mezclas selectivas de memoria y olvido. Buena parte de las discrepancias y de los conflictos entre actores políticos, pero más aun entre actores políticos y actores sociales, pueden ser definidos en estos términos.

El debate de mediados de 1998, motivado por los resultados electorales de 1997, con toda su importancia, es un síntoma de la misma situación y no

se puede esperar que en él se agoten las posibilidades de explicación. Puesto que su finalidad es la búsqueda de alternativas de acción (aunque sea simbólica), a ella se subordinan las incursiones en el terreno de la explicación que conforman los discursos enfrentados durante su desarrollo.

El disparador de la discusión fue un documento firmado por un colectivo de dirigentes y notables de los principales partidos que conforman la alianza en el gobierno² ofreciendo una explicación de los resultados de las elecciones generales parlamentarias del 11 de diciembre de 1997 y proponiendo cómo actuar en consecuencia. En las citadas elecciones se produjo una alta abstención, que no tiene sólo una forma de expresión, pero a la cual se le atribuyó un 41 por ciento de los electores potenciales.³ La discusión giró en torno a la significación de este hecho y la necesidad de formular pautas de acción futura, en particular con vistas a las elecciones presidenciales de fines de 1999.

En el curso del debate quedaron explícitas distintas imágenes del proceso actual chileno, las cuales plantean muchos problemas al análisis que pretenda rebasar el horizonte coyuntural, pero, junto a ellas, algunas de las omisiones más notables constituyen una guía segura hacia una visión más rica, especialmente para explicar la nueva coyuntura abierta por la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. Este último debate ha contribuido a hacer explícitos algunos supuestos de la transición chilena que permiten construir un cuadro más complejo que el que surge de las puras autoimágenes de los intelectuales y políticos de la concertación.

El marco institucional de la transición chilena

En los debates de la izquierda chilena se alude regularmente a limitaciones reconocidas del proceso democratizador que representa la transición. A veces se las define como “enclaves” autoritarios, o amarras institucionales, con las que la dictadura buscó asegurar el futuro de sus personeros, particularmente el de Pinochet, su familia, las fuerzas que la apoyaron y, por último, la estabilidad e inmutabilidad del régimen político formulado en la Constitución de 1980.

Estos “enclaves” están explícitamente estatuidos en la Constitución, en el sistema electoral y en la Ley de amnistía impuesta durante la dictadura, e implícitos en acuerdos no secretos, pero nunca reconocidos públicamente,

² “Renovar la concertación. La fuerza de nuestras ideas”, fechado el 8 de mayo de 1998 y firmado por 62 figuras de los gobiernos y de los partidos de la concertación, incluyendo varios ministros.

³ *El Mercurio*, Santiago, 21 de diciembre de 1997, p. D30.

entre los negociadores de la concertación y la dictadura en el periodo entre el triunfo del NO, en 1988, y el triunfo de Aylwin, en 1989.

Los orígenes, características y fuentes ideológicas de los ordenamientos aludidos deben buscarse en el pensamiento de las fuerzas que apoyaron y asesoraron a la dictadura. Para éstas, en la tarea de diseñar un ordenamiento "democrático", éste quedaba subordinado y limitado inmediatamente por la experiencia de la Unidad Popular entre 1970 y 1973.

Sin embargo, para cuando la nueva Constitución fue aprobada en plebiscito cuestionable y cuestionado en su momento, pero sin fuerzas como para oponerse a él, se marcó un cambio en la situación ideológica del conjunto de los actores políticos involucrados. Se puede afirmar que la derrota militar de la izquierda chilena tomó sólo unas horas; la derrota política continuó profundizándose hasta 1979 (el año de la división del Partido Socialista) y la derrota ideológica comenzó con el plebiscito de 1980, en que se aprobó la nueva Constitución, y culminó con la conformación de la concertación de partidos por el NO, en 1988. Con esto, más unos pocos detalles, quedaron completas las condiciones para el remplazo no sólo del orden institucional, sino también del modelo ideológico y organizativo de hacer política que prevaleció en Chile hasta 1973. En particular, a lo largo de este proceso se redefinió la relación del sistema de partidos políticos con las fuerzas sociales.

Las disposiciones constitucionales en las que se encarnan estos enclaves son varias, pero las más prominentes son: la institución de un Consejo de Seguridad Nacional compuesto por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, en empate con los miembros civiles,⁴ la presencia de senadores designados, la senaturía por vida de los ex presidentes,⁵ y el conjunto de artículos transitorios que regularon el proceso de transición, permitiendo a Pinochet permanecer en actividad en el ejército hasta marzo de 1988, y limitando así las facultades de los presidentes de la república elegidos.

Estos "enclaves" permanecieron, con pocas modificaciones, después de la negociación con la concertación triunfante. El principal logro de esa negociación fue la eliminación del artículo que establecía las exclusiones de personas y grupos de puestos de representatividad o cargos públicos por motivos ideológicos, que estaban definidas de modo que podía ser usado no sólo contra los marxistas, sino contra un amplio espectro de ideas y sus difusores.

⁴ En realidad el empate es producto de las negociaciones de 1989, al agregar al contralor general de la República. La disposición original componía el Consejo con los cuatro comandantes en jefe, el presidente de la República y los presidentes del Senado y de la Corte Suprema.

⁵ Pinochet es el único que ha ocupado ese tipo de asiento parlamentario hasta ahora.

El sistema electoral ha sido ampliamente discutido en sus características estabilizadoras y en su influencia sobre el conjunto del sistema político. Lo primero que resulta interesante es la diferencia entre la obligatoriedad del voto para quienes se encuentran inscritos en los registros de electores y el hecho de que la inscripción sea voluntaria. Esto obliga a calcular los votantes potenciales a partir de los registros de población por edades, con el fin de estimar la proporción de individuos que, pudiendo inscribirse como electores, prefieren no hacerlo. Esta forma de prescindencia política es significativa, como se verá, y hay que sumarla a los votos nulos, blancos y al número de quienes, estando registrados como electores, no concurren a votar.

Lo segundo es el efecto del sistema electoral sobre el sistema de partidos; por una parte, al favorecer a la primera minoría,⁶ el sistema electoral da un refuerzo a la mayoría conservadora en el senado, garantizada por la presencia de los senadores designados, otorgando en los hechos un poder de veto a las fuerzas que apoyaron a la dictadura. Sin embargo, algo que ha atraído a los analistas políticos es la hipótesis de que, por otra parte, este sistema estimularía la simplificación del sistema de partidos conduciéndolo, en un caso extremo, hacia el bipartidismo.

Hasta ahora el resultado es que el sistema ha contribuido a estabilizar la política partidaria en un sistema de bloques más o menos estables, pero no hay indicios de que se vaya hacia el bipartidismo. Esto, a su vez, sí ha tenido un impacto sobre las características ideológicas del proceso.⁷

Los actores políticos del proceso

El tránsito de la dictadura a la democracia fue producto de una negociación, lo que se ha definido como una transición pactada. Esto quiere decir que la dictadura como tal no fue derrotada en el terreno militar y que su derrota política es, por decir lo menos, relativa.

El proceso que condujo a este resultado puede ser esquemáticamente expuesto así: 1) la aprobación de la Constitución de Pinochet en un plebiscito en 1980 marcó el punto culminante del triunfo de la dictadura y las fuerzas que la apoyaban en contra de la oposición compuesta por el grueso

⁶ El sistema se llama binominal porque se eligen sólo dos diputados o dos senadores en cada distrito o circunscripción. Cada lista se compone sólo con dos candidatos y la lista que doble en votos a la que le sigue obtiene los dos cargos. Si no se da este caso, las dos listas con mayor votación eligen al candidato que haya obtenido más votos individuales dentro de ellas. Esto hace que en algunos casos (y no pocos) se elija a quien tiene menos votos que el segundo candidato de la lista más votada.

⁷ Peter Siavelis, "Continuity and Change in the Chilean Party System: On the Transformational Effects of Electoral reform", *Comparative Political Studies*, núm. 6, vol. 30, diciembre de 1997.

de los partidos políticos que habían actuado hasta 1973, incluyendo algunos que habían apoyado el golpe de Estado; 2) a partir de la crisis económica de fines de 1982 se desata una oposición disparada por la movilización social que rápidamente reactiva al "gremio" de los políticos profesionales, que reconstruyen sus partidos (o crean nuevas organizaciones) y se ponen a la cabeza de este movimiento opositor.

Nuestra hipótesis central es que las relaciones establecidas entre los partidos políticos y el movimiento social opositor, y la estrategia que los partidos adoptaron a partir de ese punto, explican las características del proceso de democratización que hoy se discuten.

La historia de 1983, el año de las protestas, es muy ilustrativa de lo que el proceso iba a producir. Primero, la protesta surge de un sector corporativo, los trabajadores del cobre, que han tenido actuaciones políticas antes y cuyos dirigentes están identificados por sus afiliaciones partidarias. Sin embargo, conservan una legitimidad y una capacidad de acción que los partidos políticos como tales han visto muy disminuida, luego de la aprobación de la Constitución de 1980.

Los intelectuales asociados con los partidos que apoyaron al gobierno de Allende habían entrado en una actividad combinando la moda de los "nuevos movimientos sociales" e intentando reconstituir al Partido Socialista. En particular, éstos se integraron en un bloque que reunió a las fracciones socialdemócratas que siempre hubo en el PS, con los elementos cristianos que habían oscilado hacia la izquierda desde fines de la década del sesenta. En embrión, de esta manera se establece la redefinición de la acción de los partidos con relación a las demandas sociales. Por un lado, los políticos comienzan a ver como una interferencia, en cierta medida ilegítima, las demandas sociales "reales" expresadas a través de los partidos y, a su vez, por otro, los sociólogos de los movimientos sociales definen el accionar de los políticos en el seno de éstos como una interferencia ilegítima.

Las primeras protestas superan con mucho las expectativas y la capacidad orgánica de quienes las convocan públicamente y, muy pronto, el sistema de partidos políticos es reactivado en su totalidad. Comenzando por su eje, el Partido Demócrata Cristiano, que ha conservado su organización casi intacta, se extiende a la izquierda, en la cual la situación orgánica es débil, como producto de la represión de la dictadura y de la descomposición desatada por la derrota y la búsqueda de nuevas alternativas.

Sin embargo, existen elementos fuera del sistema de partidos que dan un carácter distinto a las expresiones políticas de este movimiento social opositor, y los diferentes grupos armados que con incipientes estructuras militares intentan dar orientación a la acción espontánea e influir en la dirección estratégica del movimiento.

En esta situación, comienzan varios desarrollos paralelos que terminarán confluyendo en el proceso de transición, pero que es necesario distinguir en un análisis que se aparte de las reconstrucciones justificatorias que hoy ofrecen los actores.

La recomposición del sistema de partidos no se limita a la reactivación del centro y la izquierda. La derecha reconstruye sus partidos con el doble objetivo de apoyar a la dictadura y participar en la que ya parece inevitable transición a un sistema "normalizado".

El problema central para el análisis de los actores políticos es el establecimiento de los elementos de continuidad y cambio en la reestructuración del sistema político. Éste es el elemento sustantivo que se expresa en las diferentes periodizaciones del proceso que hacen tanto los analistas como los propios actores. Para estos últimos, el establecer su origen es a menudo establecer, al mismo tiempo, las fuentes de su legitimidad, como aspirantes a la dirección del Estado.

El otro problema metodológico es la atribución de los cambios a causas externas o internas, lo cual también presenta el doble carácter de autojustificación y legitimación para los actores. Las relaciones de cada actor con el pasado, y la extensión misma de la parte de ese pasado que está dispuesto a asumir, quedan determinadas por su proyecto en el sistema reconstruido.

El sistema reconstruido presenta algunas continuidades básicas y diferencias esenciales que enmarcan el conjunto del proceso. La continuidad fundamental es la forma orgánica de los partidos políticos, la conservación, en general, del personal profesional de la política (con grados diferentes de cambio y renovación en cada sector), que constituye un verdadero "gremio", y la concentración de su actividad en el Congreso. La diferencia fundamental es el desplazamiento hacia la derecha del espectro ideológico que, en conjunto, cubre el sistema de partidos. Así, en la izquierda, el Partido Comunista, otrora pilar de la coalición allendista, aparece ahora como extraparlamentario, puesto que su votación no le permite elegir ningún representante. En tanto, en la derecha, uno de los principales actores del momento es la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyo origen se remonta al movimiento gremialista, surgido en la década de los sesenta en la Universidad Católica, como un movimiento de derecha extraparlamentaria y opuesta a los partidos políticos.

La dominación del centro por la Democracia Cristiana representa también un desplazamiento hacia la derecha, en la medida en que sus conflictos internos se han resuelto en general a favor de esa tendencia. Pero también otra medida de la derechización es que buena parte de los agentes de la renovación socialista proceden de los sectores disidentes en la DC, en los años sesenta, y que la alianza PS-DC, como eje de la "concertación", es la que de-

termina mayormente la discusión ideológica entre los socialistas. El fenómeno del Partido por la Democracia (PPD) es un elemento nuevo en el sistema, que refleja tanto la conservación y reacomodo de la élite política como los cambios ideológicos hacia la derecha.

La transición pactada

El carácter pactado de la transición chilena es indiscutible. La génesis y características que ese pacto asumió no son discutidas abiertamente porque hay elementos que sin ser negados ni ocultados, no se muestran demasiado abiertamente. En particular se trata de la conservación de algunos "enclaves" autoritarios y, muy particularmente, de la impunidad garantizada respecto de dos tipos de "debilidades morales" de la dictadura y que la nueva democracia hereda: los atropellos a los derechos humanos y las irregularidades, por decir lo menos, en los procesos de privatización llevados a cabo por la dictadura, particularmente en la última parte de su periodo.

Todo esto es posible porque la política de la nueva democracia tiene un marcado estilo cupular, incluso se podría decir palaciego. Esto es necesario para mantener la fluidez que requiere el funcionamiento de una política que, en conjunto, se orienta más a la búsqueda de consensos que a los enfrentamientos. Parte de la explicación de esto está en el impacto que significó la ruptura del sistema político en 1973, y en el consenso explícito dentro del gremio político de que "eso" no se debe repetir. En lo que no hay consenso es en *qué es "eso"*. Aquí se abre un campo de ambigüedad ideológica que es particularmente complicado para los socialistas.

Las imágenes con que se estructuran las estrategias políticas actuales se centran en el proceso de transición, del cual se dice es pactado, es exitoso y está terminado. Antes de cuestionar estas características, es necesario incluir una adicional, que resulta definitoria para algunos analistas, pero que sólo muy esporádicamente y en forma que habrá que calificar, es mencionada por los actores del proceso:

La transición de un gobierno autoritario a uno democrático en Chile, después de dieciséis años de gobierno militar, es considerada como una de las más exitosas de América Latina. En gran medida esto se debe a que la transición chilena constituye un proceso de redemocratización y no de tránsito a la democracia.⁸

Esto muestra claramente las diferencias de concepto y de horizonte histórico con que se enfrenta el análisis del proceso político actual.

El pacto de transición fue enfrentado, aparentemente entonces, como una cuestión de “salir de la dictadura como se pueda”. Sin embargo, el analizarlo requiere examinar una correlación de fuerzas compleja.

El pacto se desarrolló entre fuerzas que estaban en reconstrucción y negociando las condiciones de su desarrollo futuro. De tal modo que no existe ningún actor cuyo “único interés” fuera el restablecimiento de la democracia. De lo que se trataba era de fijar posiciones en un sistema de alianzas. En esto el problema eran los puentes o conexiones entre las fuerzas que apoyaban a la dictadura y las fuerzas que buscaban el fin de ésta, problema cuya solución dependía de los términos en que *dentro de cada bloque* se solucionara un problema simétrico: la contradicción entre los intransigentes o “puros” y los “realistas” o negociadores.

En el bloque de apoyo a la dictadura, los puros representan las pretensiones fundacionales del régimen encarnadas en la Constitución de 1980. La reactivación política comenzó dentro del gobierno con la designación en 1983 de Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior encargado de realizar una cierta “apertura”, para enfrentar la protesta social en ascenso, ya convertida en protesta política por la primera reactivación de las organizaciones partidarias.

En el bloque opositor la cuestión era lucha armada o reactivación política. En presencia de ambas, y enmarcadas en un movimiento social de protesta que rebasaba a las dos posiciones, la cuestión crucial era encauzar la protesta social y eliminar a la estrategia alternativa. En la visión que hoy expresan los actores, el movimiento social ha desaparecido, recordándose sólo que la estrategia de transición pactada derrotó a la estrategia insurreccional, cuyo representante más significativo (pero no el único) en 1983 era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ligado al Partido Comunista.

El encuentro de los sectores conciliadores de ambos bandos supuso un largo proceso en el que los factores “externos” a la política “normal” debían ser neutralizados en cada bando. Éstos fueron, en la derecha, el actor político que representan las fuerzas armadas, en particular el ejército bajo el mando de Pinochet, y, en la oposición, los grupos armados y el movimiento social. Este último constituía un obstáculo a las negociaciones en tanto no estuviera bajo control de los partidos y mantuviera el peligro de definir la situación para alguno de los actores de la negociación. Esto era así en tanto no existieran canales legales y legítimos por donde conducir una movilización social. Al ser ilegales por definición, todas las protestas sociales tenían, desde la partida, algo en común con las organizaciones clandestinas, pese a que toda actividad partidaria había sido proscrita desde 1977.

En 1983 se realizó la reactivación de los partidos y se logró la unidad de la mayoría de las organizaciones opositoras, bajo la hegemonía de la Demo-

cracia Cristiana y con exclusión del Partido Comunista. Sin embargo, toda negociación parecía imposible debido al rechazo violento a las manifestaciones sociales y políticas por parte de la dictadura y a lo irreconciliable de los puntos de partida de los planteamientos de ambos bandos: el cuestionamiento de la legitimidad de la Constitución de 1980.

La represión hacía poco creíble una negociación y, por lo demás, todavía no había con quién negociar. Sólo en 1986 el nuevo partido de derecha Renovación Nacional logró agrupar a lo principal del heterogéneo conjunto de fuerzas políticas e ideológicas que se identificaban con la dictadura, pero entre las que comenzaba a cundir la idea de que el próximo paso del país era salir de la dictadura conservando las ventajas que ésta les había proporcionado.

La evolución ideológica que conduce al pacto es más o menos clara. Del rechazo a la legitimidad de la Constitución, del modelo de desarrollo económico en crisis y la exigencia de una asamblea constituyente, previa renuncia de Pinochet, en 1984, se pasa a la búsqueda de un plebiscito,⁹ y la aceptación del modelo de desarrollo económico, con políticas paliativas de sus peores efectos. Se descubre que el plebiscito está previsto en la Constitución de 1980 para decidir la prolongación de la dictadura hasta 1997.

Muchos elementos confluyen en las explicaciones de estos cambios. Por una parte, la cancelación de toda esperanza realista en las posibilidades de la lucha armada para lograr el derrocamiento de la dictadura, después del descubrimiento de los arsenales del FPMR y del fracaso del atentado a Pinochet el 7 de septiembre de 1986. Por otra parte, la conformación de una instancia de diálogo patrocinada por la Iglesia católica en la que confluyeron por primera vez elementos de la antigua élite política, partidarios y opositores a la dictadura, con exclusión de los comunistas. A fines de 1985 llegó un nuevo embajador de Estados Unidos con una línea de remplazo de la dictadura por un régimen estable,¹⁰ etcétera. Sin embargo, la explicación de la evolución de la política nacional en su conjunto tiene que tomar en cuenta algunos elementos básicos que no son infinitos: 1) la crisis económica; 2) la movilización social; 3) la reactivación de la élite política partidaria, y 4) la incipiente lucha armada.

Si tomamos como eje el desarrollo de la línea más exitosa, podemos reconstruir lógicamente el camino a través de sus relaciones con los otros elementos. Así, quien representa la línea que impuso al final su estrategia de transición es Patricio Aylwin, vocero de la tendencia más derechista de la Democracia Cristiana, entonces vicepresidente del partido, quien en julio

■ Patricio Aylwin, *La alternativa democrática*, 1984.

¹⁰ La percepción en Estados Unidos parece haber sido que la dictadura chilena ya no era suficientemente estable, a partir del movimiento de protesta y de los procesos de democratización ya en curso en el resto de Sudamérica

de 1984 había propuesto “dejar de lado la famosa disputa sobre la legitimidad del régimen y su constitución”, para buscar una solución. Esta posición no podía reflejar el ánimo mayoritario de la oposición, cuando las protestas y la movilización social eran la actividad principal y los partidos tenían que compartir la mesa con organizaciones gremiales y de otro tipo.

La reactivación de la élite era el terreno más fecundo en que florecía la visión de Aylwin. La lucha armada quedó cancelada, en cualquier término significativo, después de 1986. La crisis económica no significó, después de todo, el abandono del modelo de desarrollo impuesto, por lo que hubo que aprender a vivir con él. Esto implicó aceptar como legítimos los intereses empresariales en la preservación del modelo y negociar la transición política con una derecha reactivada con la fundación de Renovación Nacional en 1986 y en la que crecientes sectores buscaban deslindarse de Pinochet y su régimen.

La oposición quedó por esta vía subordinada a los sectores de la derecha que le impusieron ajustarse “con realismo” a la Constitución sin cuestionar su legitimidad. Dentro de la coalición opositora, la Democracia Cristiana, dirigida por Aylwin a partir de 1987, impone esta línea a los socialistas que, aun con corcoveos terminan “renovándose” en su conjunto. Lo más importante, el conjunto de las organizaciones sociales movilizadas son puestas al servicio de una meta electoral, el plebiscito de 1988, en el cual la campaña por el NO es dirigida por una “Concertación” de 16 partidos políticos.

El triunfo del NO en el plebiscito abrió la puerta a las elecciones generales, parlamentarias y presidenciales, de 1989 y así Aylwin asumió como presidente de la República el 11 de marzo de 1990, después de dieciséis años y medio de dictadura militar.

La nueva democracia chilena

El triunfo del NO marcó un hito que para algunos todavía es fuente de legitimidad. La campaña y el plebiscito fueron notables por la extensión de la movilización y la subordinación de las fuerzas centrifugas, como el Partido Comunista que, permaneciendo fuera de la amplia concertación, se tuvo que conformar con cualificar la consigna general del NO, agregándole “hasta vencer”.

La normalización de la vida política exigió algunos cambios previos a las elecciones, por lo cual se negociaron las reformas a la Constitución, que fueron sometidas a otro plebiscito el 30 de julio de 1989. Estas 54 reformas fueron consensuadas, de modo que el plebiscito en que se aprobaron no constituyó

una jornada particularmente memorable. Lo más importante no era lo que se cambió, sino lo que quedó pendiente y que nunca más se ha podido al-
 terar: las amarras.

Sin embargo, la euforia del resurgir de los partidos, los reacomodos re-
 constructivos (por ejemplo, la unidad de los socialistas bajo la hegemonía de
 los renovados), las negociaciones para determinar las listas de candidatos
 al parlamento, todo lo que significó la reanudación de la vida normal de los
 partidos políticos, ocultó un hecho que a un observador le pareció decisivo
 en la noche del triunfo del NO, en 1988: la movilización social no sería un
 instrumento ni un objetivo de los partidos de la democracia reconstruida.

Pero hubo otro acontecimiento que ninguna cámara pudo recoger: más allá del
 alboroto, se estaba produciendo un suceso invisible, pero decisivo. Las Casas del NO,
 capilarizadas por todo el país, cerraban aquella noche sus puertas para no volverlas
 a abrir. Aquellos lugares donde se habían nutrido la esperanza democrática y la
 participación de jóvenes, pobladores, profesionales, mujeres, artistas, militantes,
 independientes, diversas minorías, echaban el telón.¹¹

A primera vista, esto era normal, terminada la campaña electoral. Igual
 se había observado en 1970, luego del triunfo de Allende en las elecciones,
 el desmantelamiento de los CUP (Comités de Unidad Popular). Sin embargo,
 la diferencia reside en que, en 1970 esta observación era dirigida a los par-
 tidos políticos cuya organización de base remplazaba a partir de ese mo-
 mento a la más amplia movilización electoral, mientras que en 1990, los
 partidos no parecen desplegar una vida interna que recoja siquiera parte de
 la organización social de base y sus expresiones.¹²

Esta diferencia en el papel de los partidos parece estar en el corazón de
 las limitaciones del proceso de democratización. Es importante entonces
 definirla y examinar cómo se expresa a través de los voceros ideológicos de
 la élite profesional de la política. Se puede decir que las reformas de 1989
 a la Constitución sentaron el modelo de acción política de los partidos: el
 consenso cupular entre los dirigentes partidistas y la consulta final a un
 electorado que o no tiene alternativa o es sujeto a un bombardeo publicita-
 rio, que ha reducido la política a un ejercicio de mercadeo electoral. En esto
 son importantes los dos rasgos definitorios de la acción de los partidos: el
 horror al conflicto y la subrogación de la sociedad.

El horror al conflicto proviene no sólo del complicado proceso de tránsito
 entre la dictadura y la democracia, sino de la imagen que se ha impuesto de

¹¹ Rafael Otano, *Crónica de la transición*, 1995, p. 69.

¹² Véase Raúl Zamorano Fariás, "La acción colectiva popular en el proceso de transición democrática,
 Santiago de Chile: 1988-1992", tesis de maestría, FLACSO-Sede México, 1998.

las condiciones que condujeron al quiebre del sistema en 1973. Resulta ilustrativa la introducción al "Informe Retigg":¹³

...el origen último de la crisis [...] es, naturalmente muy complejo y abierto a múltiples interpretaciones que no corresponde a la comisión juzgar [...]. Pero debe señalar los factores que a su juicio fueron más importantes para generar la polarización y la crisis [...].

[Estos son]: a) la guerra fría [a partir de los años 1950], ella afectó a Chile al comienzo —quizás— en escasa medida, pero muy fuertemente a partir de los años 1960, con la Revolución Cubana.

b) Casi simultáneamente, pero en forma irrelacionada —aunque vinculada a fenómenos del intelecto también mundiales—, la polarización recibió un segundo impulso al ideologizarse los partidos y movimientos. Es decir, al propiciar ellos —en mayor o menor grado— modelos completos de sociedad, tocante a los cuales no admitían modificaciones, postergaciones ni transacciones, si no fuesen mínimas.

Lo importante es el consenso que esta imagen provoca, incluso entre algunos actores de los hechos descritos.¹⁴

Discutir estas afirmaciones puede parecer ocioso, pero es interesante que no aparece el proceso social chileno como determinante de los acontecimientos. Sin embargo, las consecuencias de un consenso acerca de tal interpretación de la historia son claras: sin ideologías, y sin luchas sociales, un sistema político puede ser estabilizado y normalizado.

La política chilena es entendida como la búsqueda de consensos entre un conjunto de actores políticos legítimos y algunos "poderes fácticos" que se legitiman por su reconocimiento mutuo.¹⁵ La noción de sociedad que subyace a las justificaciones de este accionar es la de un conjunto indiferenciado de individuos atomizados, que pueden ser auscultados a través de encuestas por muestreo. A esto se le denomina "la gente".

Una interpretación del consenso

La descripción de la trabajosa construcción de los acuerdos a lo largo de la década de los ochenta, hecha más arriba, contiene los elementos para una explicación genética del consenso dentro de la élite profesional de la polí-

¹³ Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, creada por decreto del gobierno de Aylwin el 25 de abril de 1990, con el encargo de investigar una parte, la más grave, de los abusos contra los derechos humanos durante la dictadura. El informe fue entregado en febrero y publicado en marzo de 1991.

¹⁴ Este capítulo se le atribuye en versiones periodísticas a Gonzalo Vial Correa: "este texto será discutido y reescrito unas cuatro veces antes de que la totalidad de los comisionados lo suscriba". Véase Ascanio Cavallo, *La historia oculta de la transición*, p. 89.

¹⁵ Una descripción crítica desde el punto de vista ético de todo el proceso está contenida en el libro de Alfredo Jocelyn-Holt Letelier, *El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar*, Santiago, 1998.

tica. Para los actores, este proceso representa un elemento central, la salida de la dictadura. Sin embargo, Chile no comienza en el consenso construido allí. Ese consenso condensa una situación de fuerza fundacional: el resultado de un enfrentamiento crucial, en el que los vencedores imponen un nuevo orden y los vencidos deben incorporar este hecho fundamental a su acción y su conciencia.¹⁶

El consenso de la élite política permite a los derrotados de 1973 disfrazarse de vencedores en 1988. En su conciencia la derrota desaparece como error ajeno, en algunos casos, o propio en otros, pero en todo caso como parte de los elementos arcaicos que no tienen cabida en la modernidad triunfante. Esto determina las periodizaciones con que cada uno define su posición y situación actuales. El asunto es particularmente ambiguo entre los socialistas, pero es importante recordar que es sólo un síntoma, el más notorio, de la supresión del pasado. No menos notorio es el esfuerzo de la nueva derecha "civilizada" de deslindarse de los hechos más cavernarios de la dictadura o, si no hay más remedio que referirse al pasado, culpar a los derrotados.¹⁷

El argumento que se dirige a las críticas de izquierda es que se ha avanzado "en la medida de lo posible", frase con la que Aylwin definió la meta de hacer justicia respecto de los atropellos a los derechos humanos durante la dictadura, y que se ha transformado en una muletilla recurrente para definir las limitaciones de la voluntad política de los gobiernos de la concertación. El límite de lo posible sería la amenaza que representarían las fuerzas armadas. Sin embargo, en los hechos esto representa más un chantaje hacia los movimientos reivindicativos que una situación real. De este modo, los gobiernos de la concertación han asumido como política de Estado la conservación del sistema tal como lo heredaron de la dictadura. Este hecho puede ser considerado y denunciado desde un punto de vista ético, lo cual ha sido hecho tanto por Tomás Moulian como por Alfredo Jocelyn-Holt.¹⁸ Lo que se intenta aquí es una explicación que no haga depender exclusivamente de atributos de los individuos el curso de la historia.

Ninguno de los dos autores mencionados hace depender "exclusivamente" la explicación de los atributos individuales, pero su crítica deja abierta la pregunta ¿y si ellos fueran diferentes? El problema es que son iguales a sí mismos (Jocelyn-Holt) porque son parte de una estructura de relaciones entre el sistema político y la sociedad.

¹⁶ En una visión extrema, Jocelyn-Holt define el resurgimiento de la élite política como "un combinado cívico-militar", *op. cit.*, p. 261.

¹⁷ Véase, por ejemplo, el artículo de opinión de Arturo Fontaine en la revista *Qué Pasa*, núm. 1444.

¹⁸ Véase Tomás Moulian, *Chile actual: anatomía de un mito*, y Jocelyn-Holt, *op. cit.*

En la referencia de Jocelyn-Holt a diversas versiones de una de las últimas reuniones del Comité Central del MAPU Gazmuri, antes del golpe de Estado de 1973, se muestran algunas características del gremio político. En particular, este mismo grupo es el que aparece en gran medida protagonizando la renovación socialista, y lo que a ésta se debe del carácter de la transición. Es interesante que representan casi en forma pura las características dominantes en la élite profesional de la política chilena antes de 1973, “empujados” por el movimiento de lo social a posturas en las que se sentían notoriamente incómodos antes del golpe de Estado. El aporte de los grupos de origen demócrata-cristiano a la Unidad Popular fue más elitista que masivo. Su respaldo electoral nunca avaló la representación que lograron en los puestos de gobierno. Su postura obedeció siempre a un cálculo político, por lo demás correcto, de que la sociedad empujaba al conjunto del sistema político hacia la izquierda, particularmente al Partido Socialista. En esa reunión se expresa el cálculo, también correcto, de que el Estado como estructura de dominación está separado del gobierno y que, en ese caso habría que abandonar la conexión con el movimiento de lo social que no es manejable.¹⁹

El consenso de fines de los ochenta constituye la solución a ese problema: el gremio político ocupa los cargos del gobierno, a resguardo de las presiones de la sociedad, amparado en la tutela militar. Los casos conocidos de movimiento militar han tenido que ver principalmente con la garantía de impunidad a la familia del dictador más que con otras cosas.

Estos rasgos de la conciencia de la élite política han quedado en evidencia en el llamado “debate de la concertación”, una serie de documentos difundidos a través de Internet en la página de la Fundación Cambio 2000, creación de algunos operadores políticos vinculados con la concertación.

En todos ellos hay acuerdo respecto del éxito del modelo económico heredado de la dictadura. Tampoco se discute la definición de la situación actual como “proceso de modernización”.²⁰ Las diferencias se refieren a si el elevado abstencionismo registrado en las elecciones de 1997 es una muestra de “malestar”, que debe ser tomado en cuenta para definir las propuestas de la concertación en las próximas elecciones.

En un extremo de esta polémica se ubicó José Joaquín Brunner, negando, primero, la conexión que se establece al partir la polémica entre abstencionismo electoral y el malestar, y afirmando, en segundo lugar, que ese malestar difuso está mal conceptualizado, puesto que corresponde a “sínto-

¹⁹

En una cita de Viera-Gallo, se atribuye a Moulian la propuesta de “alterar lo que en el partido se ha dado en llamar ‘el carácter de la revolución chilena’”, Jocelyn-Holt, *op. cit.*, p. 232.

fue incorporado al debate “¿Intereses?”, *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 13, pp. 179-198. (Este texto

mas que se agudizan, precisamente en épocas de acelerada modernización y desarrollo de las sociedades”.²¹

Además de la respuesta de Lechner, otra intervención interesante en la polémica es la de Carlos Hunneus²² quien define la situación desde un ángulo diferente:

Chile ha tenido una transición muy exitosa, que resolvió desde un comienzo lo que Sartori llamó el peligro “desde adentro” de las nuevas democracias —impulsar una “buena política”, es decir, solucionar los problemas económicos de los ciudadanos— y ha resuelto acertadamente el tema más específico y más delicado de la transición, el restablecimiento de las relaciones cívico-militares y el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, no se niega la existencia del malestar:

La protesta electoral y el clima adverso en la opinión pública responde a factores institucionales algunos de los cuales vienen desde antes de la inauguración de la democracia y que no fueron modificados por la transición. Otros han surgido por decisiones tomadas después de 1990 y también influyen los efectos no buscados de las decisiones de la transición.

Si la dictadura significó que las decisiones se hicieron sin el ciudadano, ahora se ha ido al extremo opuesto: todo debe hacerse por el ciudadano o consultando al ciudadano.

El principio plebiscitario se apoya en la premisa de saber “lo que piensa la gente” a través de los métodos de investigación social especialmente *focus group* y encuestas, de manera de hacer lo que el ciudadano quiere.

La explicación que propone Hunneus es interesante: en ausencia de partidos de protesta “como el PC antes de la caída del muro de Berlín o los partidos ecologistas como en Europa [...] se da una subrepresentación del conflicto latente existente en nuestra democracia”.

La lista de conflictos esquivados es larga, pero entre ellos destaca la cuestión de la sumisión del poder político al poder económico, en términos del poder de los grupos económicos y, una cuestión política relacionada implícitamente, la no limitación de los gastos en las campañas electorales. Es sintomático que las referencias a estos conflictos modernos tengan como punto de comparación la política española y alemana.

Además de otros aportes polémicos, la discusión terminó en esta parte con un documento titulado “La gente quiere cambios”, cuyos autores se

²¹ José Joaquín Brunner, “Malestar en la sociedad chilena: ¿de qué, exactamente, estamos hablando?”, p. 1.

²² Carlos Hunneus, “Desencanto y malestar en la política chilena, causas políticas y económicas”, en Corporación Tiempo 2000, *El debate de la concertación*.

identifican como “herederos de la lucha contra la dictadura y del triunfo del NO. En él se destaca la participación de masas en el logro del fin de la dictadura y se llama a desechar el “conservadurismo” que ha caracterizado a la concertación, a discutir el “modelo económico” y a formular un programa que supere las limitaciones al desarrollo que se deriven de su aplicación.

Lo interesante de todas estas posiciones es que su horizonte temporal va hacia atrás sólo hasta la dictadura, o mejor aún, hasta el fin de la dictadura. Ése es quizás el consenso más importante. Pero la memoria espera agazapada y asalta a los desmemoriados en cualquier momento. La detención de Pinochet en Londres ha puesto a la vista los aprontes para el futuro, pero ha obligado a realinearse con respecto al pasado.

La normalidad con la sociedad ausente

Las posiciones asumidas por el gobierno de Chile han sido calificadas de hipócritas (Alain Touraine)²³ o pinochetistas (Luis Sepúlveda).²⁴ El asunto Pinochet se ha sentido como una condena a vivir de cara al pasado (Jorge Edwards).²⁵ Pero por sobre todo, ha mostrado que la impunidad del dictador es del interés del Estado chileno.

La detención del ex dictador en Londres activó un movimiento social que languidece, pero no puede desaparecer: el de los familiares de detenidos desaparecidos. Es un movimiento incómodo para los supuestos vencedores en contra de la dictadura, que pierde presencia ante la aparente fatalidad de la impunidad consagrada por la transición chilena, en la que la reparación se limitó a recopilar la información acerca de las víctimas con resultado de muerte o desaparición (olvidando la tortura, como recuerda Jocelyn-Holt).²⁶ Sin embargo, en cualquier oportunidad reaparece ante la esperanza de reparación, aunque ésta sea simbólica.

El interés nulo del gobierno en esta causa se reveló al saber que el presidente Frei concedió por primera vez una audiencia a la directiva del movimiento, la cual había sido reiteradamente negada con anterioridad.²⁷ Alguien puede pretender que esto sea finalmente reducido a un asunto “privado” de los afectados directamente. Sin embargo, algo más se movió con la detención de Pinochet.

23

“El derecho y la política: el ‘caso Pinochet’”, *El País*, Madrid, 3 de enero de 1999.

24 “El Alzheimer político”, *El País*, digital, *Debates*: “La suerte de Pinochet”.

25 “Las estatuas de sal”, *El País*, digital, *Debates*: “La suerte de Pinochet”.

26 *Op. cit.*, p. 207, a lo que habría que agregar prisión sin acusaciones, exilio y todos los atropellos ni siquiera registrados.

27 *La Tercera*, Santiago, 19 de enero de 1999.

La negación de la sociedad en los dos bandos es notable. Ambos han acusado de mercenarios a los manifestantes de bando contrario en Londres. Las explicaciones que se buscan y ofrecen de los hechos del proceso son notoriamente conspirativas. Y la principal consecuencia política de todo parece jugarse en las probabilidades de los precandidatos presidenciales.

Ésta es sólo una muestra del cálculo político que vive ausente de cualquiera expresión de demandas o reivindicaciones sociales. La sociedad es sólo un agregado de individuos indiferenciados, llamados genéricamente "la gente". Una masa encuestable por muestreo, pero cuyas demandas no pueden ni así ser tomadas al pie de la letra,²⁸ tan sólo pueden ser esgrimidas como justificación para las políticas injustificables (como la mala calidad de los programas de televisión por el "rating").

La moda intelectual está presente, sin embargo. Es una expresión de la correlación de fuerzas en el terreno ideológico. No es éste el lugar para ocuparse de otro capítulo de esta historia (que es por demás interesante para la evolución de las ciencias sociales en Chile). La selección de conceptos y de instrumentos empíricos para referirse a la sociedad resulta reveladora. Ya hemos hecho mención a la anulación de cualquier estructura social tras el nombre genérico "la gente".

El análisis político, por partidista que sea, requiere por lo menos intentar controlar el autoengaño, aunque éste parezca ser un requisito de una actuación que refleje convencimiento. Por esto creo oportuno citar el documento más crítico del debate de la concertación, "La gente quiere cambios":

La alianza de izquierda, la centroizquierda y todo el progresismo, que permitió poner fin a la dictadura, derrotándola con el NO en 1988 y eligiendo a Patricio Aylwin en 1989 y a Eduardo Frei en 1993, nació para cambiar el sistema autoritario y neoliberal y la cultura conservadora heredada.

Un análisis de la situación de la democracia en Chile, guste o no, debe ampliar su horizonte temporal: la redemocratización debe evaluarse en comparación con la situación previa a la ruptura del sistema político en 1973.

recibido en febrero de 1999
aceptado en marzo de 1999

²⁸ Véase la muy razonable crítica de Hunneus al "principio plebiscitario" y sus posibles consecuencias, *op. cit.*, p. 3.

Bibliografía

- AYLWIN, PATRICIO, *La alternativa democrática*, Santiago, Andante, 1984.
- CAVALLO, ASCANIO, *La historia oculta de la transición*, Santiago, Grijalbo, 1998.
- Comision Nacional de la Verdad y Reconciliación, "Informe (Rettig)", Santiago, Empresa Periodística La Nación, 1991.
- Corporación Tiempo 2000, *El debate de la concertación*. Varios artículos, Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega Riquelme, Carlos Hunneus, E. Trioni, Sergio Aguilo y Fanny Pollarolo, www.tiempo2000.cl, 1998.
- JOCELYN-HOLT LETELIER, ALFREDO, *El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar*, Santiago, Planeta/Ariel, 1998.
- MOULIAN, TOMÁS, *Chile actual: anatomía de un mito*, Santiago, LOM-ARCIS, 1997.
- OTANO, RAFAEL, *Crónica de la transición*, Santiago, Planeta, 1995.
- SIAVELIS, PETER, "Continuity and Change in the Chilean Party System: On the Transformational Effects of Electoral Reform", *Comparative Political Studies*, núm. 6, vol. 30, diciembre de 1997.
- VALENZUELA, ARTURO y PETER SIAVELIS, "Ley electoral y estabilidad democrática. Un ejercicio de simulación para el caso de Chile", revista *Estudios Públicos*, núm. 43, invierno de 1991.
- ZAMORANO FARIÁS, RAÚL, "La acción colectiva popular en el proceso de transición democrática, Santiago de Chile: 1988-1992", tesis de maestría, FLACSO-Sede México, 1998.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

- El País*, Madrid.
- El Mercurio*, Santiago.
- La Tercera*, Santiago.
- Qué Pasa*, Santiago.

